



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

La Plata, (Fechado digitalmente en sistema Lex100 PJN).

Y VISTOS: Este expediente N° FLP 13494/2025/2/CA1, caratulado: "Incidente N°2 - ACTOR: ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEMANDADO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ INC. DE MEDIDA CAUTELAR".-

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Justicia de la Nación y, en consecuencia, suspendió la aplicación de la Resolución Normativa 26/2024 dictada por ARBA, que estableció la obligación de los encargados de Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios de continuar actuando como agentes de recaudación de los impuestos a los automotores y de sellos.

Para resolver de esta manera, consideró que ARBA no tenía facultades legales para designar unilateralmente a funcionarios nacionales como agentes de recaudación de impuestos provinciales sin un convenio previo. Por tanto, entendió que se encontraba acreditada la existencia de indicios razonables de la ilegitimidad del acto administrativo dictado por la autoridad fiscal provincial.

II. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.

En sus agravios, manifestó que la decisión cautelar había agotado el fondo del asunto, convirtiéndose en una medida autosatisfactiva, ya que el juez había interpretado los artículos 39 y 40 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, lo cual resulta propio del objeto final de la causa, sin darle la posibilidad a la Provincia de ejercer su derecho de defensa.

Fecha de firma: 04/09/2025

Alta en sistema: 05/09/2025

Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EMILIO SANTIAGO FAGGI, SECRETARIO DE CAMARA



#40215015#470216989#20250903150501484

Continuó diciendo que, cuando la pretensión cautelar debe ser examinada en su totalidad, es señal de que el derecho que se invoca no resulta manifiesto y requiere de un proceso de conocimiento amplio.

Asimismo, entendió que el magistrado había avanzado sobre cuestiones federales, al decidir que ARBA no podía designar funcionarios nacionales como agentes de recaudación sin acuerdo previo con el Ministerio.

Respecto al Convenio celebrado en el año 1991 entre el Ministerio de Economía de la Provincia y el Ministerio de Justicia de la Nación, sostuvo que establece que los encargados de los registros seccionales actuarían como agentes de recaudación, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, las leyes provinciales y las disposiciones normativas complementarias, y que las partes lo suscribieron con la única finalidad de consensuar y coordinar las pautas y tareas operativas necesarias para que sea más eficiente el ejercicio de la competencia tributaria que ya tenía la Provincia, así como también, facilitar el pago de los impuestos a los contribuyentes.

Por otro lado, refirió que el Ministerio de Justicia de la Nación no se encontraba legitimado para representar en juicio a los titulares de los registros por asuntos vinculados a su actuación como agentes de retención.

Posteriormente, señaló que el juez omitió evaluar los efectos negativos y perjudiciales, directos e inmediatos, que tendría la medida cautelar dictada en la recaudación de fondos públicos de la Provincia. Asimismo, expresó que el Ministerio tampoco había acreditado que la decisión adoptada por la administración provincial le ocasione un gravamen de manera directa, que no pueda ser subsanado con el dictado de una sentencia definitiva, sino que, la urgencia invocada por la actora se relacionaba con la necesidad de asegurar el cumplimiento de la reforma del sistema registral, las que responderían a las





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

finalidades expuestas por el Estado Nacional en el DNU 70/23.

Por último, manifestó que el juez valoró esto último por sobre el perjuicio económico y presupuestario que la concesión de la medida cautelar le causaría al estado provincial, conforme se desprende del informe técnico de la Gerencia de Recaudación de ARBA, el que establece que generaría una merma proyectada de \$225.000 millones en la recaudación de los impuestos de sellos y automotor, durante el resto del ejercicio fiscal de este año.

Esa cifra representa un impacto crítico que compromete directamente el financiamiento de políticas públicas esenciales como los servicios de salud, educación, seguridad y asistencia social.

Por último, expresó que el juez omitió ponderar que la Resolución de ARBA 26/2024 gozaba de la presunción de legitimidad que se reconoce a los actos de la Administración, en este caso, los de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires.

III. Por su parte, corrido el traslado de los agravios al Ministerio de Justicia de la Nación, sostuvo que el recurso carecía de fundamentación suficiente, ya que se limitaba a expresar el desacuerdo con la Resolución 276/2024 dictada por dicho Ministerio.

Asimismo, manifestó que, al haber sido denunciado el Convenio de 1991 aludido, habría dejado de existir la obligación de los Encargados de Registro de la Propiedad Automotor de actuar como agentes de retención de los impuestos provinciales, ya que, la Resolución N°26/2024 del ente recaudador provincial, se entrometió en competencias que no son propias ni delegadas.

Respecto del perjuicio fiscal que podría sufrir la Provincia, sostuvo que no se produciría ya



que ARBA tenía un plazo de 90 días para adecuar sus sistemas, una vez que el convenio hubiese sido dejado sin efecto.

Por otro lado, afirma que la medida cautelar no constituye un adelanto de jurisdicción, porque la suspensión provisoria de efectos no equivale a una declaración definitiva de invalidez y además, la decisión de fondo lo que se persigue es la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 26/2024 del ente recaudador provincial.

En relación a los requisitos de la medida cautelar, sostuvo que la Resolución de ARBA afecta el régimen jurídico del automotor, de carácter federal, lo que evidenciaría un conflicto normativo y una alta probabilidad de ilegitimidad.

Respecto del peligro en la demora, afirmó que la Resolución mencionada afectaría el funcionamiento de los registros seccionales, que podría llevar a la paralización del servicio registral y comprometer el interés público.

IV. Sentado lo expuesto, cabe señalar que el Ministerio de Justicia de la Nación inició la presente acción contra la Provincia de Buenos Aires y contra la Agencia de Recaudación (ARBA), con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución N°26/2024 emitida por el organismo recaudador provincial y, en subsidio, de los artículos 39 y 40 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, solicitó una medida cautelar para que se suspenda la vigencia de la norma impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos.

En este sentido, explicó que, mediante el Convenio de Complementación de Servicios suscripto el 3 de octubre de 1991 entre el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la Nación, se estableció un régimen de colaboración entre la entonces Dirección Provincial de Rentas y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Fecha de firma: 04/09/2025

Alta en sistema: 05/09/2025

Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EMILIO SANTIAGO FAGGI, SECRETARIO DE CAMARA



#40215015#470216989#20250903150501484



## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

Bajo tales circunstancias, en virtud de dicho Convenio, se dispuso que los Encargados de los Registros Seccionales de la DNRPA, ubicados en territorio bonaerenses, actuarían como agentes de recaudación de algunos tributos provinciales, por lo que, debían inscribirse, con ese carácter, ante la autoridad fiscal provincial y, en consecuencia, proceder a la percepción de los gravámenes correspondientes cuando el contribuyente realice los distintos trámites registrales.

Además, argumentó que en el mentado convenio, se fijaron procedimientos específicos para garantizar la efectiva retención y posterior transferencia de los montos recaudados a la Dirección Provincial de Rentas, estableciendo los mecanismos de fiscalización y control a cargo de dicho organismo.

De tal modo, estableció que, en el marco de una política económica orientada a la desregulación, el 30/8/2024, el Ministerio de Justicia nacional dictó la Resolución N° 276, mediante la que denunció el Convenio en cuestión junto con la totalidad de los convenios de complementación de servicios vigentes suscritos entre dicho Ministerio y las diversas provincias, municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Explicó que esta medida se realizó con el fin de reducir las cargas administrativas y tributarias que afectan a la ciudadanía, así como en la eliminación de barreras burocráticas que entorpecen el normal desenvolvimiento de la actividad económica.

En este sentido, manifestó que, el 4/9/2024, la DNRPA remitió la carta documento N° CD401385011 a ARBA, comunicando formalmente que el convenio suscripto quedaba sin efecto a partir del vencimiento del plazo de 90 días corrido. Seguidamente, señaló que ARBA respondió, mediante carta documento diciendo que la rescisión del Convenio no alteraba las facultades de verificación y fiscalización que le correspondían a la provincia en materia tributaria.



Posteriormente, el día 27/09/2024, ARBA dictó la Resolución 26/2024, a través de la que dispuso la continuidad de la obligación de los Encargados de Registros Seccionales de la DNRPA de actuar como agentes de recaudación de los impuestos a los automotores y de sellos. Además, la resolución dispone que el ente recaudador provincial mantendría las potestades de fiscalización, pudiendo controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los funcionarios registrales.

V. En tales condiciones, si bien el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar, en primer lugar, la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora (Fallos: 307:2267, entre otros).

Respecto del peligro en la demora, la Corte Suprema de Justicia sostiene reiteradamente que a los fines de conceder medidas cautelares debe acreditarse que la existencia de este requisito, para justificar el dictado de la medida, debe resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que podría provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas (Fallos: 344:3442). También, que el examen de la concurrencia de este requisito exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego por la sentencia definitiva; debiendo resultar en forma objetiva los efectos que produciría, entre ellos, las consecuencias económicas (Fallos: 344:1033; "Gador SA", sentencia del 13/05/2021; "BASF Argentina SA", sentencia del 22/04/2021; "Gualtieri Hnos SA", sentencia del 08/07/2021; 343:1086 Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti; 342:1591; 341:1717; 339:225; 329:5160; 329:3890; 329:2111; 328:4309; 319:1277).





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

Por otra parte, cuando la cautela se refiere a actos emitidos por los poderes públicos, en virtud de la presunción de validez que ostentan, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa.

VI. Bajo esta perspectiva, no se vislumbra de manera nítida que se encuentre acreditado el peligro irreparable que causaría aguardar hasta el dictado de la sentencia definitiva, por no resultar claro -a esta altura del proceso- como puede verse impedido u obstaculizado seriamente la función registral en cuestión; sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de una práctica que se viene realizando desde hace 34 años sin que se vea afectado el funcionamiento de los Registros del Automotor y las actividades que llevan a cabo. Ello, sin perjuicio de los fines perseguidos por la Resolución N°276/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación, cuyo análisis y valoración exceden el ámbito de conocimiento propio de la etapa cautelar.

Por otro lado, la circunstancia de que la provincia de Buenos Aires deje de percibir los impuestos de sellos y automotor mediante la vía convenida oportunamente, no le ocasionaría un perjuicio al Estado Nacional en términos de rentas públicas o recaudación impositiva como sí, por el contrario, al estado provincial, de forma directa e inmediata sobre su presupuesto y erario público.

Todo lo expuesto, sin perjuicio de lo que se decida al momento de examinar la legitimidad de la normativa provincial impugnada en la sentencia definitiva, que resulta el ámbito y la etapa natural de evaluación de esta clase de planteos.

Por tanto, en orden a las consideraciones que anteceden este Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución apelada.



Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones y comuníquese por DEO al juzgado interviniente.

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS  
JUEZ DE CÁMARA

CÉSAR ÁLVAREZ  
JUEZ DE CÁMARA

EMILIO SANTIAGO FAGGI  
SECRETARIO DE CÁMARA

